



Comunidad de Madrid CONSEJERÍA DE FAMILIA
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



MINISTERIO
DE DERECHOS SOCIALES
Y AGENDA 2030



Plan de Recuperación,
Transformación
y Resiliencia



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

ORDEN

NÚMERO 160/2025

CONSEJERÍA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

Expte.: 143/2022 (A/OBR-020577/2022)

DIVISIÓN DE CONTRATACIÓN

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes

PRIMERO: Mediante Orden de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, nº 2673/2022, de 24 de noviembre, se adjudicó a **COCIRSA, CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L** el contrato de obras, denominado “**OBRAS DE REFORMA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL INMUEBLE DE LA PLAZA DE SANTA CRISTINA Nº3, PLANTA BAJA DE MADRID, A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION UE**”, formalizándose el día 19 de diciembre de 2022, con un plazo de ejecución de 4 meses.

Por Orden 85/2023 de 16 de enero, se acordó la suspensión temporal total de las obras debido a que no se había adjudicado el contrato de la “Dirección Facultativa de las obras de reforma para implantación del Servicio de Emergencia Social en el inmueble de la Plaza de Santa Cristina nº 3, planta baja de Madrid a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – financiado por la Unión Europea – Next Generation EU” imprescindible para dirigir las obras del primero.

Con fecha 13 de febrero de 2022 se formalizó el contrato de Dirección Facultativa mencionado, contando con un mes de plazo para la redacción de los Informes Previos al inicio de obra.

Por Orden 724/2023 de 9 de marzo, se acordó el levantamiento de la suspensión temporal total de las obras con fecha 13 de marzo de 2023.

Mediante Orden 1541/2023, 22 de mayo, se aprobó la ampliación del plazo de ejecución de las obras hasta el 14 de agosto de 2023, debido a retrasos en la ejecución ocasionados por circunstancias sobrevenidas no imputables al contratista.

Posteriormente mediante Orden 2536/2023, 11 de agosto, una nueva ampliación del plazo de ejecución de las obras en lo que se refiere a los trabajos de carpintería, manteniéndose el plazo parcial para la finalización del resto de los trabajos el día 14 de agosto de 2023.

SEGUNDO: No obstante, en visita de obra realizada el 5 de octubre de 2023, se comprueba que no se han finalizado la totalidad de los trabajos, incumplándose por tanto el plazo total de finalización de la obra. Como consecuencia de ese incumplimiento, mediante Orden nº 3837/2023 de esta Consejería, se impone al contratista una penalidad de 8.832,28 euros por haber incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total del contrato mencionado.

TERCERO: Mediante Orden 3836/2023, de 5 de diciembre, se fija el día 20 de diciembre de 2023 como nueva fecha de terminación de las obras.

CUARTO: El Director de las obras, D. Arturo Delgado Urías, a través del informe de fecha 17 de mayo de 2024, pone de manifiesto la no finalización de las obras por la empresa adjudicataria **COCIRSA CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L.**, suponiendo un nuevo incumplimiento del contratista en cuanto al plazo fin de obra. Mediante Orden 1912/2024, de 13 de junio, se establece el día 20 de junio de 2024 como nueva fecha de finalización de las obras, sin perjuicio de la posterior determinación de responsabilidades por incumplimiento las



obligaciones previstas en el contrato. Finalmente, el 20 de junio de 2024 se emite la certificación final de las obras.

QUINTO: Queda acreditado que la empresa COCIRSA CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L. ha incurrido en incumplimiento reiterado del plazo total. Conforme al régimen de penalidades previsto en el artículo 193.3 de la Ley de Contratos, cuando el contratista, por causas Imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.

En el mismo sentido se pronuncia la cláusula 25 del PCAP cuando establece que *“cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales recogidos en el programa de trabajo aprobado, la Administración podrá optar atendidas las circunstancias del caso, por la resolución del contrato o por la imposición de penalidades, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la LCSP”*,

SEXTO: A tenor de lo estipulado en el Art. 194.2 de la LCSP, la Subdirección General de Análisis y Organización de esta Consejería, como unidad administrativa responsable de la ejecución del contrato denominado “OBRAS DE REFORMA PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA EN EL INMUEBLE DE LA PLAZA DE SANTA CRISTINA Nº3, PLANTA BAJA DE MADRID, A TRAVÉS DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA-FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA-NEXT GENERATION UE” propone al órgano de contratación, representado por la Secretaría General Técnica de la citada Consejería, que se inicie el procedimiento de Acuerdo para imponer a la empresa COCIRSA CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L., adjudicataria del referido contrato, una penalidad por una cuantía de **31.320,13** euros, por incumplimiento de la prestación, conforme al régimen de penalidades establecido en el PCAP:

Nº de días de retraso desde el 22 de septiembre al 14 de junio de 2024: 267 días.

Penalidad por día: 187,92 euros/día.

Importe total de la penalidad: 50.174,64 euros.

Deduciendo la penalidad anteriormente impuesta: 50.174,64 euros - 8.832,28 euros = 41.342,36 euros.

Según lo establecido en el artículo 192 de la Ley 9/2017, la cuantía de cada una de las penalidades no podrá ser superior al 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por cien del precio del contrato. Puesto que el precio del contrato, IVA excluido, es de 313.201,33 euros, la penalidad a imponer no puede superar 31.320,13 euros.

Por tanto, a pesar de que el importe de la penalidad, atendiendo al incumplimiento producido, debería ser de 41.342,36 euros, en aplicación del artículo 192 de la Ley 9/2017, la penalidad a imponer a la empresa COCIRSA CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L. tiene una cuantía de 31.320,13 euros, siendo esta cifra el 10 por ciento del precio del contrato, IVA excluido

Dicha propuesta de imposición de penalidades es comunicada al contratista el día 14 de noviembre de 2024, otorgándosele un plazo de cinco días para que formule las alegaciones que estime pertinente.

SEPTIMO: Mediante escrito de 20 de noviembre de 2024, la empresa contratista formula alegaciones a la propuesta de penalidad, solicitando que se declare nula y se revoque la misma.

La Subdirección de Análisis y Organización, en su informe de 23 de diciembre de 2024, establece que *“una vez analizadas las alegaciones las mismas no desvirtuaban el motivo de la imposición de penalidades, continuando así con el procedimiento en los términos indicados en la propuesta.”* Los motivos por los que se desestiman las alegaciones del contratista son los siguientes:

- Los retrasos sufridos por incidencias de obra fueron contemplados en las ampliaciones de plazo primera y segunda, y así se estableció en las mismas, indicando que los retrasos fueron debidos a circunstancias sobrevenidas no imputables al contratista. En la última ampliación, igual que en la tercera, sin embargo, no se recoge esa indicación.
- Respecto del pago de las certificaciones, como ya se indicó anteriormente, según el Art. 198.4 de la LCSP, en caso de demora en el pago de las mismas, la administración deberá abonar al contratista, los intereses de demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. Solamente, si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, tal como se establece en el Art. 198.5 de la misma ley, el contratista podrá proceder, en su caso, a la suspensión del cumplimiento del contrato, debiendo comunicar a la Administración, con un mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en esta Ley. No obstante, en ningún caso ha tenido lugar la solicitud de dicha suspensión por parte del contratista.
- En la Orden 1912/2024 de 13 de junio se autorizó una nueva fecha de terminación de la ejecución de las obras, si bien se indicaba que esta ampliación era sin perjuicio de las penalidades que en su caso procedieran, resultando aplicables en el caso de los contratos administrativos lo previsto en los artículos 192 y siguientes de la Ley 9/2017. Por tanto, la aprobación de una ampliación de plazo no exime a la Administración de su capacidad de imponer penalidades, puesto que los retrasos en este caso no fueron debidos a circunstancias sobrevenidas no imputables al contratista.

Rebatidas las alegaciones realizadas por la contratista, se confirma en todos sus extremos, la penalidad propuesta por la Subdirección General de Análisis y Organización.

De acuerdo con lo expuesto, y de conformidad con la propuesta de la Subdirección General de Análisis y Organización, en aplicación del art. 193.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

DISPONGO

Imponer a la entidad **COCIRSA, CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES, S.L** una penalidad por importe de **TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE EUROS CON TRECE CENTIMOS** (31.320,13 euros) por haber incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo total del contrato mencionado.

De acuerdo con el artículo 194.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la penalidad se hará efectiva mediante la deducción de las cantidades que en concepto de certificaciones mensuales deban abonarse al contratista, o sobre la garantía que se haya constituido cuando no pueda deducirse de las mencionadas certificaciones.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia o los Juzgados de lo Contencioso-



Administrativo de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

En Madrid,
a fecha de la firma

LA CONSEJERA DE FAMILIA, JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES
(P.D. Orden 1558/2021, de 28 de septiembre, BOCM nº 239, de 7/10/2021)
LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: LUBIMA JIVKOVA KOSSEVA
- ***2285**
Fecha: 2025.02.04 18:29